

TESIS ESQUEMATICAS SOBRE EL BALANCE DE PODER FRENTE AL NUEVO PERIODO PRESIDENCIAL

Seminario Permanente de Análisis de la
Realidad Guatemalteca.

En este análisis, vamos a intentar desarrollar seis tesis sobre el proceso a través del cual ha ido cristalizando el actual balance de poder en Guatemala. Partimos de la base de que el poder nunca está completamente monopolizado por una de las fuerzas que se mueven en el escenario político. El poder, como control de las necesidades fundamentales del grupo humano nacional y de su reparto entre los componentes de ese grupo, se halla normalmente hegemonizado —no estática sino conflictivamente— por alguna de las fuerzas que aspiran a detentarlo. El poder se retiene mediante propiedad, control organizativo, autoridad cultural, legitimación jurídica o fuerza de las armas. Su hegemonización, sin embargo, tiene siempre en sí un elemento de precariedad, representado por la disputa o el desafío que a esa hegemonía de los intereses de una fuerza (clase social, fracción de clase, fuerza social, etc.) plantean los intereses de otras fuerzas. Si se puede entablar esta disputa o presentar este desafío es porque las fuerzas que no hegemonizan el poder tienen —con todo— acceso a cuotas de poder ya constituido o en formación.

Sobre esta base conceptual proponemos las siguientes tesis sobre la formación social guatemalteca. Las cuatro primeras tesis corresponden a procesos más estructurales.

Primera Tesis. La formación del capitalismo agroexportador dependiente en el estilo guatemalteco.

Desde 1871, con el triunfo político de la Reforma Liberal —expresión de clase de un grupo de agricultores criollos que descubren el café como producto importante para el mercado internacional— se desarrolla en Guatemala una fracción de clase espe-

cializada en una agroexportación que utiliza más racionalmente las dos riquezas hasta entonces conocidas en el territorio guatemalteco: la tierra y la fuerza de trabajo humana. El precio del café en el mercado internacional conduce a una revaloración de la tierra que se traduce, primero, en no permitir la propiedad improductiva de grandes extensiones (se cultiva mucho más intensamente la tierra ya poseída) y, segundo, en el despojo de tierras eclesiásticas, comunales o ejidales concebidas como privilegio o como reserva de subsistencia de comunidades municipales estáticas. Se suprimen, además, las restricciones de movimiento de las poblaciones indígenas, universalizando en todo el territorio nacional el servicio o la servidumbre de esta fuerza de trabajo a la agricultura de exportación del café. Todo esto se hace creando una nueva legitimidad a través del registro obligatorio de la propiedad y de la predominancia jurídica de la forma privada de la propiedad, así como a través de las leyes de trabajo obligatorio prestado a las fincas de café.

El proceso, en su conjunto, implica una verdadera revolución clasista. Para afianzarse, necesita del reforzamiento de un Estado que, hasta entonces, apenas poseía mecanismos para ejercer el poder central. La creación del Ejército y la iniciativa de abrir vías de comunicación de mayor rapidez y eficacia, así como la centralización en el Estado de funciones antes muy repartidas (educación, políticas financieras, etc.), son los símbolos de este proceso de consolidación del Estado que continúa hasta hoy.

En esta utilización capitalista —fundamentalmente— de la tierra y de la fuerza de trabajo se siguen dando elementos de un modo de producción anterior (colonial, apenas transformado por el factor de libertad de comercio sin intervención de la

metrópolis, después de la independencia). En las relaciones de producción, p. ej., se sigue dando el colono, la mediería, y se acentúan aspectos de contratación esclavista del trabajo. Por otro lado, no se somete a toda la tierra a la misma utilización racional, sino que se permite la pervivencia de un minifundio básico para el abaratamiento del factor trabajo en la producción de las grandes fincas y, por ello, complementario de la extensa finca, racionalmente explotada. La irracionalidad de la producción económica en el minifundio secunda la obligatoriedad legal de una prestación de trabajo a las fincas, al añadirle la necesidad de trabajo estacional migrante que brota de la insuficiencia para la subsistencia del minifundio.

Todo lo anterior es efecto de la entrada tardía del capitalismo guatemalteco al mercado internacional, en donde los bienes industriales de producción están ya más apreciados que los agrícolas. De aquí la constante de menor precio que acompañará a los productos agrícolas exportables de Guatemala respecto de los industriales que tendrán que importar. Además, el mercado mundial, por el hecho de haber sido una creación de los países que primero hicieron la revolución capitalista, está dominado por ellos; de aquí la constante de fluctuación de precios que acompañará siempre a los productos agrícolas exportables de países capitalistamente tardíos y poco influyentes en dicho mercado, como Guatemala. Finalmente, los siglos de proceso de formación capitalista que han precedido a la entrada de Guatemala a este modo de producción han supuesto una acumulación de capital, sobre todo financiero, inexistente en Guatemala en 1871. En consecuencia, los créditos para financiar la producción tendrán que venir del extranjero y someterse en su contratación a una carestía relativa importante. El Estado, en virtud del

privilegio que concede a la forma privada de propiedad, y aunque su existencia sea función de los intereses más exigentes de la burguesía cafetalera en formación, tendrá que depender para su vitalidad de esos mismos créditos financieros del exterior o de pagos desproporcionadamente pequeños en comparación con las concesiones que, a cambio de esos ingresos necesarios, se hagan al capital internacional. Signos de esta dependencia serán en Guatemala los enclaves bananeros y la propiedad extranjera de servicios nacionales tan cruciales como la energía eléctrica, los ferrocarriles y los puertos.

La dictadura de clase, ejercida principalmente a través del despotismo personalista en el que juega un papel importante el grado de servilismo a los intereses extranjeros dominantes, es la forma de gobierno que este capitalismo dependiente en formación adoptará por espacio de tres cuartos de siglo. Sólo será interrumpida por breves intentos de modernización democrática, salidos —el más importante de estos últimos, el de 1920-22— de la imaginación creadora de los más modernos entre los representantes de la fracción de clase dominante agroexportadora cafetalera (la familia Herrera).

La permanencia de las etnias indígenas en Guatemala en una proporción mucho mayor que en cualquier otro territorio centroamericano, añade el elemento de discriminación al de explotación y facilita la dominación de clase dividiendo al indio pobre del ladino pobre. Así se entiende la pervivencia de relaciones de producción cuasi-esclavistas hasta 1945.

En estos tres cuartos de siglo comienza la tendencia de diversificación del capital agroexportador guatemalteco, que lo va encaminando poco a poco a la inversión en el gran comercio, en la banca y aun en una industria incipiente. Más tarde será esta tendencia la que, al consolidarse, señala sectores de intereses diferenciados al interior de los intereses de la clase dominante nacional en formación. Estos intereses sectoriales tal vez estén dando origen hoy a fracciones de clase con intereses contrarios entre sí de alguna manera, aunque muy entrelazados por la predominancia constante de la agroexportación y por el intercambio de recursos de capital entre los diferentes sectores.

Segunda Tesis. El primer intento de modernización del capitalismo agroexportador dependiente de Guatemala.

La interferencia de la ideología en el desarrollo normal del capitalismo agroexportador dependiente de Guatemala viene también por el camino de la dependencia. La fuerte corriente democrática alimentada por la lucha contra el fascismo que desemboca en la Segunda Guerra Mundial es un factor importante de estímulo al cambio político, con-



gruente por otra parte con las necesidades brotadas de un proceso de complejización de la formación social guatemalteca. Las corrientes democráticas norteamericanas encontrarán aliados subalternos en la fracción de clase agroexportadora dominante, harta del despotismo personalista del dictador Ubico. El desarrollo del Estado, además, ha dado origen a unas capas medias emergentes —burócratas y en concreto maestros, profesionales, oficiales del Ejército, masas universitarias—, que exigen un puesto en la cerrada estratificación social del biclasismo guatemalteco. Sólo a través de procesos democráticos lo ven posible, ya que en éstos es posible acceder a municipalidades rurales y urbanas (Ubico mantenía “intendentes” nombrados en lugar de alcaldes), a asambleas legislativas, a partidos políticos, a organizaciones sindicales, etc. a través de una trama más amplia y numerosa que la del otorgamiento de favores y prebendas por parte del dictador despótico. El ímpetu anticolonialista de los Estados Unidos favorecido por la necesidad del capitalismo hegemónico norteamericano de universalizar mercados monopolizados por metropolis colonialistas e interrumpido unos años más tarde por la guerra fría, al mirar con agrado el rescate para el Estado nacional de servicios dados en concesión a empresas o Estados extranjeros, abre las posibilidades de acceso a los puestos de burocracia y tecnocracia al interior de lo que llegarán a ser las “instituciones autónomas” del Estado. El sindicalismo permitido en las plantaciones bananeras de los enclaves ofrecerá además un modelo para los pequeños contingentes obreros que se van creando en las artesanías-industrias de la ciudad capital y en alguna que otra regada por los Departamentos. La misma actitud democrática facilitará la supresión de las leyes de trabajo forzado consideradas atentatorias contra las libertades humanas (no en último término, contra la libertad de contratación salarial). Todo esto explica de alguna manera algunos factores que se unifican en el movimiento “popular” interclasista, que dio al traste con la dictadura e inauguró el período “revolucionario”.

La década de 1944 a 1954 constituyó en Guatemala un período de modernización del capitalismo agroexportador dependiente que quiso revestirse —en el contexto de una geopolítica que pronto le sería muy adversa— de nacionalismo político e independencia en el desarrollo económico. Poco intervinieron en el lanzamiento de este proceso las clases empobrecidas del campo guatemalteco. Una especie de populismo importado (el “socialismo espiritual” del Presidente Juan José Arévalo, testigo en su exilio argentino del desarrollo del peronismo) fracasó por falta de masas obreras urbanas manipulables, de las que Guatemala carecía por el retraso de más de treinta años en el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que caracterizó a otros países más grandes de América Latina. Desde 1951, sin

embargo, en el período presidencial del Coronel Jacobo Arbenz, este populismo intentó seriamente la movilización del campo, más que en alianza, en dependencia de los movimientos obreros incipientes y de los movimientos pequeño-burgueses capitalinos. En el campo guatemalteco sí había masas campesinas, inconscientes y acrílicas en su enorme mayoría, pero sometidas a unas condiciones objetivas de explotación y autoexplotación (mezcla de capitalismo, residuos de modos de producción coloniales y modo de producción campesino), preñadas de posibilidades de rebelión o, al menos, de entusiasmo de seguimiento a rebeliones inducidas. Ya en tiempo de Arévalo, por otro lado, el nuevo Código Laboral había suprimido jurídicamente el trabajo, cuasi-esclavista, forzado, dando así paso a relaciones de producción menos impuramente capitalistas. La latente fuerza de rebeldía, intermitente en sus erupciones, de los grupos étnicos indígenas (motines de los que está sembrada la historia colonial e independentista) se mostró de nuevo en el motín de Patzún en 1944, sangrientamente aplastado con la ayuda de pequeños propietarios rurales ladinos. En 1948, nació a la vida legal el Partido Comunista moderno de Guatemala (el Partido Guatemalteco del Trabajo —PGT—), cuya mayor definición “revolucionaria” le permitió, a pesar del número pequeño de sus afiliados, ejercer una influencia importante en la presidencia de Arbenz.

El intento de modernización capitalista con un estilo nacionalista y con un desarrollo independiente en el terreno económico se plasmó en las expropiaciones en favor del Estado de las tierras de los enclaves bananeros (expropiaciones pagadas no a precio de mercado, sino conforme al valor de los impuestos que pagaban al Estado), en la Reforma Agraria, de la cual fueron parte las expropiaciones citadas anteriormente, en la construcción de una carretera al Atlántico que independizara las exportaciones guatemaltecas de los ferrocarriles, aún en manos de una concesión dada a una empresa extranjera norteamericana, en una política exterior que, en foros como el de la OEA, se mantuvo orgullosamente divergente de la política anticomunista de guerra fría de los Estados Unidos, ya en curso, etc.

Sin embargo, la frágil alianza interclasista que puso fin a la dictadura de Ubico en 1944, se escindió rápidamente en los años subsiguientes de la década “revolucionaria”. El Código Laboral, la libertad de organización de las masas populares, la profundidad de la Reforma Agraria, apoyada sobre todo en una profusión de organización campesina (comités agrarios, etc.), y la actividad del Partido Guatemalteco del Trabajo en puestos importantes de asesoramiento y de administración del gobierno de Arbenz, asustaron a la fracción de clase más tradicional de entre la burguesía agroexportadora. Más importante aún, las recién ascendidas capas medias

evolucionaron hacia la derecha política, al verse empujadas en su estabilidad y bonanza recién adquiridas por el impulso del movimiento popular organizado. La Iglesia Guatemalteca, embebida de una ideología anticomunista y dirigida con carisma por el Arzobispo de Guatemala (Rosell y Arellano), realizó una cruzada nacional para despertar la resistencia popular en contra de la "amenaza comunista". Bajo el estandarte del Cristo de Esquipulas, la defensa de la más absoluta propiedad privada y de la máxima sumisión a los Estados Unidos se encubrieron en el movimiento que culminó en la invasión de guatemaltecos exiliados y mercenarios desde Honduras, preparada con ayuda de la CIA y apoyada por la fuerza aérea norteamericana.

Factor importante en toda la modernización capitalista de esta década (fracasada por lo que respecta a su proyecto de desarrollo capitalista nacionalista e independiente políticamente) fue el crecimiento del Estado y, en concreto, de uno de sus organismos principales, el Ejército. Constitucionalmente, en 1945, el Ejército quedó aparentemente despolitizado (así lo afirmaba su estatuto constitucional), pero, en realidad, quedó convertido en una fuerza social autónoma respecto del poder ejecutivo, al crearse la Comandancia General de las Fuerzas Armadas como función que desempeñaría alguien distinto del Presidente de la República. Desde este germen, se desarrolló el proceso que iría separando al Ejército de las fuerzas progresistas "revolucionarias", hasta llevarlo a una pretendida "neutralidad" en la lucha entre el Estado Constitucional —simbolizado por el Gobierno de Arbenz— y los invasores "liberacionistas" del 54. Esta neutralidad, que implicó desobediencia a la directriz presidencial de armar al pueblo contra los invasores, supuso en realidad un enmascarado golpe de Estado, que acabó con la década "revolucionaria". El ascenso del militarismo como fuerza social que se asimilaba cada vez más a la clase dominante, su propio dinamismo de profesionalización progresiva que lo llevaría a depender tecnológica y —consecuentemente— ideológicamente del Pentágono, fueron condición necesaria, si bien no suficiente, para que el proceso iniciado de modernización capitalista revirtiera su sentido y se consolidaran los rasgos clasistas y dependientes del capitalismo agroexportador de Guatemala.

Tal vez no necesite explicitación muy amplia el hecho de que la forma de gobierno que necesariamente adopta en esta década el Estado Guatemalteco es la de una democracia burguesa correspondiente al proyecto económico que se intenta. La pronta ruptura de la alianza interclasista que la sustentaba, las tensiones internas al Ejército —consecuencia del partido que van tomando sus altos oficiales entre las diferentes fracciones de la burguesía y respecto de la pequeña burguesía—, los conflictos que se desarrollan al interior del mismo equipo de gobierno de Ar-

benz y desde los diferentes —y a veces contradictorios— influjos que sus miembros ejercen sobre las fuerzas sociales guatemaltecas, ofrecen una explicación a la amenaza de disolución que se cieme continuamente sobre la constitucionalidad (numerosos intentos golpistas en tiempos del Presidente Arévalo, p. ej., y toda la confabulación contra Arbenz). Otra parte de la explicación proviene de la desestabilización provocada por las compañías multinacionales y por el Estado Norteamericano desde sus servicios de inteligencia. Lo importante, sin embargo, es que esta forma de gobierno no podrá ya ser fácilmente alterada dentro del proceso de desarrollo del capitalismo dependiente guatemalteco. En los veinticuatro años del período contrarrevolucionario sólo seis corresponderán a gobiernos de hecho.

Tercera Tesis. El proceso de diversificación del capitalismo dependiente guatemalteco.

Fracasado el intento —probablemente utópico en la forma como se hizo— de desarrollo modernizante capitalista y de independencia política, se continuará hasta 1970 una tendencia modernizante en el capitalismo guatemalteco, que lo desarrollará y, a la vez, lo irá haciendo cada vez más dependiente —económica y políticamente— del eje de poder central del capitalismo mundial.

La modernización se hará en este período a través de dos mecanismos fundamentales. Los dos son bastante comunes a toda el área centroamericana. El primero será la diversificación de la agroexportación. En gran parte provendrá —como todo el desarrollo capitalista guatemalteco— de los beneficios y ganancias obtenidos del café. Las fértiles tierras de la costa sur irán siendo aplicadas, primero al cultivo del algodón, más tarde al de la caña de azúcar (aprovechando la coyuntura del bloqueo económico norteamericano a Cuba) y, finalmente, al incremento de una ganadería cada vez más racionalmente explotada. Parte de este desarrollo, con todo, provendrá también de compras fáciles hechas en las tierras de las plantaciones bananeras del Pacífico, las cuales —después de ser devueltas a la United Fruit Company por el nuevo Estado contrarrevolucionario para dejar bien asentado el principio antes lesionado de la propiedad privada de los bienes de producción —fueron vendidas a ese mismo Estado. Capitales logrados desde la burocracia o desde las profesiones —incluidas la militar— serán empleados en la compra de estas tierras y puestos a funcionar de una manera "racional" en la explotación algodonera. Familias de la burguesía tradicional de Guatemala (oligarquía cafetalera) o familias que —desde principios de siglo— han acumulado capital, en regiones más apartadas de Guatemala (el Departamento del Quiché, o el de Quezaltenango, p. ej.) invertirán tam-



bién más tarde en el negocio cañero y en el azucarero, así como en el ganadero, bien transformando tierras ya poseídas desde antes, bien comprándolas a otros terratenientes.

Desde más o menos 1950, cuando empiezan a perfilarse los intentos hacia un plan de integración económica centroamericana, el segundo mecanismo estará representado por un esfuerzo —al menos con treinta años de retraso respecto de países más grandes de América Latina— de sustitución de importaciones industriales. En otros estudios se encuentra suficientemente estudiado cómo el plan de la CEPAL para esta integración económica centroamericana fue aguado de manera crucial por las condiciones impuestas a este proceso por el Estado Norteamericano, representante en esto de los intereses de las compañías transnacionales. La oposición norteamericana al plan de industrias centroamericanas con régimen especial (es decir, industrias de las cuales no podía existir sino una sola factoría para toda el área centroamericana), así como la participación de las inversiones industriales extranjeras en los incentivos fiscales otorgados a las nuevas industrias del área, aseguró en Guatemala un predominio importante del capital extranjero. Este último pronto inició un desplazamiento desde la inversión en plantaciones-enclaves (en tierras básicamente) y en servicios a la inversión en agroindustrias, en industria química, en implementos de la industria automotriz radicada en otros países, etc. El caso más importante, por su simbolismo en la historia de Guatemala, es la venta de las plantaciones bananeras de la United Fruit Company, primero al Estado y luego a medianos o pequeños propietarios, conservando ella —por un lado— la comercialización del producto (siguió siendo propietaria de las grandes bodegas de almacenamiento, de los muelles de embarque y de la línea marítima de transporte hacia los mercados internacionales), y —por otro lado— reinvertiendo sus ganancias en muy variadas agroindustrias.

La composición de clases a la que este proceso económico responde se puede iluminar de la siguiente manera. El gran miedo de los agroexportadores a que las veleidades revolucionarias del gobierno de Arbenz minaran el acceso a los mercados capitalistas de donde extraían tradicionalmente sus ganancias; el miedo de esta misma fracción de la burguesía a que los nuevos propietarios rurales, como efecto de la reforma agraria, disminuyeran de un modo importante la disponibilidad de fuerza de trabajo estacional barata para las cosechas de exportación y así impedirían el uso de una super-explotación del semi-proletario guatemalteco, capaz de compensar su desventaja tradicional frente al capital de los países industrializados y capaz —por ello— de mantener su tasa de ganancia intacta, es lo que —después de revertir el proceso “revolucionario”— les dará su predominancia dentro de la clase dominante y los irá dotando cada vez de mayor agresividad económica. Para este golpe de timón, no tendrán más remedio que afianzar su dependencia o subalternidad como clase dominante nacional respecto de la burguesía de los países industrializados y, sobre todo, de la de los Estados Unidos. En este momento se dan cuenta de la necesidad de un partido sólidamente clasista que represente sus intereses desde dentro del aparato formal de la democracia. Así nacerá, en primer lugar, el Movimiento Democrático Nacionalista (MDN), cuyas escisiones internas llevarán a la constitución del idigorismo (favorecedor de los nuevos intereses industriales) y del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), efímero el primero, pero cada vez más fuerte y coherente el segundo.

La pequeña burguesía, cuya fuerza económica creciente se encuentra sin representación política, intentará desde 1959 resucitar las expresiones políticas de clase que la conformaron en el período “revolucionario”. La evolución del Partido Revolucionario (PR), como veremos, será un claro trasunto de la evolución de esta pequeña burguesía, que se irá ali-

neando cada vez más con determinadas fracciones de la burguesía o —en otros momentos— aparecerá sometido a la fuerza social creciente que el Ejército irá representando. Dentro de ella, por escisión, se irá observando el desarrollo de una social-democracia, que representa a capas medias inconformes con el rol secundario que en el ejercicio del poder les concede la burguesía y, a la vez, —desde su mayor capacitación administrativa y tecnocrática—, más clarividentes respecto de las condiciones sociales necesarias para la continuación del proceso de modernización del capitalismo. La expresión política de esa social-democracia nunca —hasta el momento— ha pasado del nivel de Comité Cívico pro-constitución de un partido. Su constitución en partido político propiamente tal ha sido una y otra vez bloqueada desde el predominio en el Estado de las expresiones políticas de la burguesía. Con todo, en el período siguiente se permitirá a estas capas medias el desempeño de cuotas de poder limitadas.

La pequeña burguesía ha funcionado también en la escena política guatemalteca desde un partido típicamente “tercerista”, la Democracia Cristiana Guatemalteca —DCG—. Iniciada en la sacristía por los esfuerzos del Arzobispo carismático Rosell y Arellano, típico exponente guatemalteco del pontificado de Pío XII; surgida en un principio del aglutinamiento de presonalidades de la burguesía no entintadas de la ideología de la Reforma Liberal (conservadores o “cachurecos”, según la expresión guatemalteca, de raigambre católica) aunque representantes de los mismos intereses económicos, y de jóvenes recién salidos de la Universidad o con poco tiempo de ejercicio profesional —ellos sí, auténticos representantes de la pequeña burguesía—, la DCG no adquirirá carta de ciudadanía política hasta la última parte del período a que nos estamos refiriendo. Su proceso de autonomía progresiva respecto de la Jerarquía Eclesiástica y su posibilidad de constitución en partido político no dejan de estar, probablemente, influidos por el esquema democrático pluralista señalado desde Washington por la política de Alianza para el Progreso de la administración Kennedy. Es un factor de orden ideológico —el mayor énfasis puesto en los fundamentos filosóficos de programas políticos concretos, y un énfasis brotado de la aspiración de la Doctrina Social de la Iglesia a constituirse en fuente inspiradora de proyectos económico-políticos históricos lo que distinguirá a la DCG de los intentos social-demócratas antes reseñados. Hasta qué punto, sin embargo, este énfasis se mantendrá en los años siguientes como distintivo de la aspiración política de una parte de la pequeña burguesía, lo veremos más adelante.

Las clases dominadas comienzan el período contrarrevolucionario con una situación de completo aplastamiento. Continúa, sin embargo, en la clandestinidad territorial de Guatemala o en el exilio, la ac-

tividad del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). La política conjunta del Estado Norteamericano, de sus compañías transnacionales y del Estado Guatemalteco es tener en cuenta, a pesar de todo, la cuota de poder de que algunas organizaciones populares clasistas han gozado durante el Gobierno de Arbenz y tratar de responder a su frustración —ante el proceso de regresión de la Reforma Agraria— con la adquisición de tierras por el Estado, dentro de las cuales, bajo la administración del patrón-Estado, se comiencen parcelamientos que hagan aumentar el número de pequeños propietarios rurales. Pobre sustituto de la Reforma Agraria, este programa de parcelamientos quedó además estancado con el asesinato de Castillo Armas y no se recomenzará intensamente —bajo otras formas, por ejemplo la de colonización de nuevas tierras—, hasta bastante años más tarde.

El fermento de conciencia de clase, reivindicativo y político, se apagará en Guatemala, sin embargo, por muy pocos años. En un primer momento resurge dentro precisamente de la Institución Armada con el intento de golpe al idigorismo dado el 13 de noviembre de 1960. Oficiales aún nostálgicos del proyecto arbenzista y otros, concientizados paradójicamente en un indignado nacionalismo a través de los cursos anti-guerrilla que reciben en las escuelas panamericanas dominadas por la ideología y la técnica del Pentágono, en un momento en que ya el mismo Presidente Eisenhower, al dejar su investidura, puede hablar del complejo “militar-industrial” como grave peligro a la democracia norteamericana, son los protagonistas de este primer intento de combate contra el proyecto atrincherado de la burguesía. A ello ayudó el rechazo a la creciente corrupción reinante al interior del régimen idigorista. Fracasado el golpe, los supervivientes de él se harán famosos como iniciadores, dos o tres años más tarde, del movimiento guerrillero de Guatemala, que instaurara en Guatemala el primer intento de subversión del régimen capitalista dependiente por la violencia revolucionaria. Estos “focos” guerrilleros, fieles seguidores del modelo cubano de la Sierra Maestra, pero ya sin el factor sorpresivo de Cuba en su favor, sino —al revés— teniendo que enfrentarse a un imperialismo plenamente sumergido en la política de contrainsurgencia a nivel mundial, desarrollarán formas de guerrilla “montañosa” y rural que el Estado guatemalteco acabará destruyendo casi completamente entre el final de la década de los 60 y el comienzo de la de los 70. No faltarán en estos movimientos intentos de guerrilla urbana, que florecerán —con todo— más al comienzo del siguiente período. El potencial invertido por los Estados Unidos en el adiestramiento del Ejército guatemalteco para la contrainsurgencia y en la participación en la misma operación será determinante para el resultado de estos primeros intentos. El PGT será uno de los prime-

ros partidos comunistas del continente latinoamericano, adictos por lo demás a la línea Moscú, que —al menos teóricamente y a veces en prácticas concretas— aceptará como auxiliar la forma de lucha armada. Siempre, sin embargo, mantendrá su esperanza principal en formas políticas contractuales que permitan la continuación de un proceso de profundización del capitalismo en Guatemala como paso necesariamente previo a cualquier proceso de transición hacia el socialismo.

El mes de marzo de 1962 representará un estallido popular urbano, en el que obreros y estudiantes juntarán fuerzas por primera vez desde 1954 para tratar de conseguir un derrocamiento del régimen contrarrevolucionario. El surgimiento de las guerrillas, este estallido en las calles capitalinas y la perspectiva de unas elecciones ya cercanas en las que se afianza la candidatura de uno de los representantes del período “revolucionario”, el ex-Presidente Arévalo, señalaron los hitos del camino que conducirá al golpe de Estado del 31 de marzo de 1963 que —terminando con el idigorismo— instaurará el gobierno militar del Coronel Peralta Azurdía y señalará el comienzo del afianzamiento de un nuevo tipo de Ejército en Guatemala.

El Gobierno del Jefe de Estado, Peralta Azurdía, representará un intento de saneamiento económico (frente a la corrupción, disfuncional para el proceso de modernización capitalista, del idigorismo), una tolerancia de los primeros intentos serios cooperativistas en el agro guatemalteco, un intento de paternalismo frente a obreros y empleados (simbolizado en la introducción del aguinaldo navideño), y —sobre todo— los primeros pasos de la contrainsurgencia, vacilantes al principio, pero preñados ya de su capacidad destructiva del tipo de guerrilla entonces existente en Guatemala. Nacerán también en este período las primeras organizaciones paramilitares de la burguesía y del mismo Ejército, que dirigirán sus golpes contra todo aquél —político, dirigente sindical o campesino, intelectual, etc.— que parezca representar la cabeza visible del movimiento revolucionario subterráneo. Así, en un primer golpe espectacular, perecerá gran parte de la primera dirigencia del PGT.

La ruptura de la constitucionalidad, con todo, no favorecía las intenciones modernizantes de todo el proceso. Se inició pues un movimiento hacia una nueva Constitución que restaurara la forma democrática burguesa de gobierno. La radicalidad económica de la fracción dominante de la burguesía —la agroexportadora— se reflejará, sin embargo, en la Constitución de 1965, a través de la enorme dificultad legalmente inscrita a todo intento de verdadera Reforma Agraria, incluso de una Reforma Agraria capitalista-modernizante.

Se llegará finalmente a un proceso electoral, el de 1966, en el que los nacientes intereses del Ejérci-

to, unidos a los de la parte más modernizante de la burguesía —los nuevos industriales— engendrarán un nuevo partido clasista, el Partido Institucional Democrático (PID). La división de estas expresiones políticas de la burguesía conducirá entonces al triunfo electoral de la pequeña burguesía agrupada en el Partido Revolucionario (PR) y al único Presidente civil del período contrarrevolucionario, el Licenciado Julio César Méndez Montenegro, ex-decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos y continuador del liderazgo de su hermano Mario, muerto en plena campaña electoral en circunstancias misteriosas. El período post-electoral —como más tarde revelaría el compañero de fórmula de Méndez Montenegro, el extinto ex-Vicepresidente de la República Clemente Marroquín Rojas— vivió una crisis subterránea resuelta por un pacto entre el Ejército y el Presidente electo que, al dar mano libre al Ejército para sus operaciones de contrainsurgencia, dio también al traste con cualquier posibilidad de apertura real democrática. Con Méndez Montenegro, presidente títtere —excepto en un intento, a los dos años de su gobierno, de liquidar con el apoyo norteamericano la fuerza de los oficiales militares más envueltos en la contrainsurgencia, entre ellos el futuro Presidente Arana—, se inician ocho años de casi continua suspensión de garantías y de estado de sitio. La indecisión represiva que supondrá la sustitución del Jefe de la Base Militar de Zacapa (principal centro de operaciones contrainsurgente), del Ministro de la Defensa y del Director de la Policía Nacional, hará aparecer como principal problema del país la violencia y como principal solución la “pacificación”. El Coronel Arana, aglutinando en una coalición política los dos partidos clasistas de la burguesía y el Ejército, levantará esta bandera del orden para el progreso y ganará limpiamente las elecciones de 1970. Un intento desestabilizador de la derecha —grupos paramilitares del MLN—, concretado en el secuestro del Arzobispo de Guatemala en 1968 y dirigido a adelantar la solución “pacificadora”, no prosperará por la prudencia y reticencia con que el resto de la Jerarquía y el clero reaccionarán en esta ocasión.

En el orden de los procesos ideológico-políticos, son importantes en este período un hecho y una corriente. El hecho es el intento de diálogo que, durante unos meses, se escenifica en la prensa, bajo el patrocinio del periodista Isidoro (Chilolo) Zarco, posteriormente víctima de la violencia, y que tiene como otro protagonista a un miembro de las guerrillas revolucionarias. Por primera vez gozan éstas últimas de una tribuna de expresión en un órgano de comunicación masiva. Con el trasfondo del pacto Méndez Montenegro-Ejército, no es de extrañar que este diálogo, encaminado —¿con voluntad real?— a mostrar las posibilidades de convivencia de las fuerzas revolucionarias con un régimen supuestamente

democrático, se extinguiera sin resultados. Hasta dónde detrás de este diálogo estuvo la tendencia del PGT a lograr un acuerdo "democrático", y hasta dónde la tregua, aparentemente declarada por una parte del movimiento guerrillero en el período transicional del gobierno de facto del Jefe de Estado a la Presidencia del PR-Ejército, dañó irreparablemente las posibilidades revolucionarias de las guerrillas, son factores que quedan en el terreno de las hipótesis. La corriente que hemos mencionado es la que se da a lo largo y ancho de la geografía guatemalteca en instituciones de Iglesia, sobre todo de la Iglesia Católica, que comienzan a dedicarse intensamente a un trabajo de promoción humana, incluyendo elementos de concientización sobre los problemas locales, pero también sobre la problemática realidad global de Guatemala. Se trata de un factor no despreciable dentro del despertar popular que presentará, tras de un primer momento de recrudescimiento de la represión, el período siguiente.

Durante todo este período, el auge económico provocado por el primer rodaje de los procesos de integración económica, permite la creación en Guatemala de un sector industrial-obrero que llega a alistarse al final de la década 1960-70 con un 15 o/o del Producto Geográfico Bruto, delimitando el surgimiento de una fracción de la burguesía con fuertes intereses industriales y desarrollando —a través del comercio intrazonal, cuyo incremento es constante— una fuerza nueva en la fracción comercial de la misma burguesía. Gran parte de estos intereses industriales son extranjeros también, principalmente norteamericanos, alemanes y japoneses. Por primera vez estarán, al mismo tiempo, sentadas las bases en Guatemala para el desarrollo de una clase obrera algo más que insignificante, aunque el porcentaje de sindicalización de esa clase sea muy bajo.

Cuarta Tesis. La Consolidación del Estado capitalista dependiente guatemalteco.

La elección del Coronel Arana a la Presidencia de la República representa un triunfo absoluto de la burguesía guatemalteca, formando un bloque totalmente monolítico. Dos sectores de la pequeña burguesía, el representado en el PR y el agrupado alrededor de la DCG, sufren una derrota, clara y contundente, a nivel nacional. A nivel municipal, sin embargo, la alcaldía capitalina cae en poder de la social-democracia, o más bien, a pesar de la etiqueta doctrinaria y "partidista" (se trata, como hemos mencionado, de un Comité Cívico), en poder de un grupo bien organizado alrededor de una especie de caudillismo urbano representado en la figura, de importante valor político, del Lic. Manuel Colom Argueta, que desplaza de su grupo político a otros liderazgos no menos inteligentes, como el del Doctor Francisco Villagrán Kramer.

La dureza política de este régimen, necesaria para afianzar un proyecto económico de profundización de la modernización del capitalismo dependiente guatemalteco, había sido ya presagiada en la negativa de negociar con los guerrilleros el rescate del embajador alemán y el del Ministro de Relaciones Exteriores del régimen anterior; negativa claramente influenciada —en el caso del embajador alemán— por el Presidente electo Arana y por el Ejército que lo respaldaba, junto con toda la burguesía. Anteriormente aun, la radicalidad de la burguesía se había manifestado en el fracaso de la iniciativa de reforma tributaria propuesta por el entonces Ministro de Finanzas de Méndez Montenegro, Doctor Alberto Fuentes Mohr, que tuvo que ser trasladado, ante su fracaso, al Ministerio de Relaciones Exteriores.



El Informe Rockefeller, trabajado un poco antes como base de la política norteamericana de la Presidencia de Nixon para con América Latina, señalaba ya la importancia del Ejército en América Latina, para bien o para mal (léase: para procesos reformistas-revolucionarios o para procesos modernizantes que miraran a una pretendida necesidad de desarrollo económico ordenado, previo a la satisfacción de necesidades sociales insatisfechas). A través de varios mecanismos que intentaremos detallar sucintamente, el Ejército guatemalteco se aprovechará durante esta presidencia de la visión nixoniana en orden a fortalecer su rol y —como efecto secundario— el del Estado guatemalteco, dentro de un proyecto económico novedoso.

Para poder llevar a cabo un plan perfectamente concebido de crear un nuevo grupo económico de poder al interior de la burguesía, el Coronel Arana se aliará con la pericia empresarial y las relaciones económicas del agresivo (algunos lo llaman incluso mafioso) grupo económico emergente del Sur de los Estados Unidos (protegido por Nixon desde el poder); la alianza se realizará a través de varios cubanos exiliados. Al mismo tiempo —en otra parte de su plan, engendrado probablemente durante su exilio diplomático como Embajador en Nicaragua— se aliará también con los intereses convergentes del grupo Somoza de Nicaragua. Así, con la ayuda finalmente de algunas familias de industriales y comerciantes guatemaltecos de mayor raigambre económica, pero de igual falta de escrúpulos económicos, se constituirá una fracción económica de la burguesía, cuya acumulación fulgurante de capital se realizará en parte por medios extraeconómicos, aprovechando el dominio de los crecientes negocios emprendidos por el Estado. Al mismo tiempo, sin embargo, este proceso tendrá otra consecuencia de mayor importancia aún: para ganar una lealtad absoluta en los oficiales del Ejército, las tierras del Departamento del Petén (la tercera parte de Guatemala), mientras son abiertas a una colonización campesina, única que se trasluce, son repartidas generosamente entre dichos oficiales, al amparo del anonimato del Organismo autónomo del Estado para el Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP) que, al revés de los demás departamentos del país, no tiene abiertos al público sus registros de propiedad de tierra. En el Petén y en las tierras, ya promisorias para el níquel y el petróleo, de la zona noroccidental de Guatemala, se van creando las bases de una oficialidad terrateniente, asimilada a los intereses de clase de la burguesía. En la apertura del Petén, intensificada en esta presidencia tras su iniciación en años anteriores, se juntan los hilos de varias piezas de un plan maestro económico-político. Hasta el Petén se perseguirá a los últimos restos de la guerrilla "foquista" para acabar de destruirlos. En el Petén se ofrecerá —demagógicamente— una salida al creciente ahogo de la tierra campe-

sina minifundista, tanto del Oriente y Sur-Oriente como del Altiplano indígena occidental. Pero, al mismo tiempo, al sentar las bases de la terratenencia militar en el mismo Petén, las duras colonizaciones y los trabajos de desmonte y desbrozamiento de la tierra ofrecerán la perspectiva de convertir la última reserva de tierra de Guatemala en una repetición estructural del sistema de latifundio-minifundio, sobre el cual se creó antes la base de la riqueza cafetalera y más tarde la base de la diversificación agroexportadora en su conjunto. Por el hecho de haber aceptado la burguesía guatemalteca al Ejército como árbitro de sus conflictos intra-clase, este acceso de la alta oficialidad al poder económico tradicional de Guatemala constituirá uno de los elementos de la creciente autonomía del Estado guatemalteco respecto de la clase dominante.

La enorme —relativamente hablando para el tipo de presupuesto del Estado guatemalteco— inversión del Estado en carreteras, al mismo tiempo que mejora la infraestructura para el desarrollo de toda la base económica del proyecto de modernización capitalista, ofrece también otra posibilidad de acumulación de capital por medios no ortodoxos para los funcionarios del Estado.

Se trata, además, de un Estado que, en el proceso intrazonal de la Integración Económica Centroamericana, ha resultado con mucho el más ganancioso, y al cual la interrupción de dicho proceso por el conflicto Hondureño-Salvadoreño sólo aportará mayores beneficios, ampliamente compartidos —naturalmente— por la burguesía guatemalteca.

En la presidencia de Arana se concluye también el proceso de recuperación para el Estado guatemalteco de los servicios que aún estaban en manos de empresas extranjeras; el principal símbolo de este proceso es la adquisición de la Empresa Eléctrica, naturalmente por compra, no por expropiación, como en tiempos de Arbenz.

La importancia del rol del Estado en el conjunto del proyecto de modernización capitalista se inscribe dentro de un marco de dependencia respecto del capital extranjero, significado en el aporte de recursos de los Bancos internacionales del sistema (BID, Banco Mundial, etc.) y en la nueva concesión de territorio guatemalteco para aventuras capitalistas que rebasan la posibilidad inversora del Estado, o al menos así se hace ver. Los casos más importantes son la concesión minera de níquel a una compañía de capital mixto norteamericano-canadiense —la EXMIBAL— y la constitución de las bases legales para las concesiones petroleras (una vez estallada la crisis energética en 1973) con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos.

Políticamente, la pequeña burguesía recibe golpe tras golpe, el más significativo de los cuales es el asesinato del líder social-demócrata Adolfo Mijangos, contrapunto de Manuel Colom Argueta en el

Congreso de la República. La Universidad de San Carlos, si no propiamente intervenida, sí tiene que sufrir continuamente el hostigamiento del gobierno de Arana. Cualquier veleidad de protesta contra la continua violación de los derechos humanos de parte de grupos o personas de alguna prominencia en las Iglesias es cortada en seco con la expulsión del país o la amenaza.

La guerrilla rural es infiltrada sucesivamente y también lo es su sucesora, la urbana, de manera que, hacia 1973, parece haber sido extinguido el foco revolucionario violento o al menos reducido a regiones muy apartadas del país. El PGT recibe en 1972 un nuevo golpe, con el asesinato de una segunda camada de su vieja dirigencia. El triunfo de la burguesía y de su nuevo socio, el Ejército, es decir, el triunfo del Estado capitalista dependiente guatemalteco, apoyado fuertemente por la política dura de la presidencia de Nixon, parece consolidado definitivamente.

Sólo al final de este período presidencial, ya en medio de los arreglos para la sucesión del régimen, una importante huelga del magisterio y un conflicto de tierras en la comunidad indígena del Departamento de Jalapa, apuntan hacia la realidad de que el movimiento de rebeldía al *statu quo* no está totalmente extinguido.

El proceso electoral que se inicia en diciembre de 1972, presentará claramente las características que el resultado del plan de consolidación del Estado guatemalteco en el movimiento hacia una modernización del capitalismo dependiente en Guatemala podían hacer prever. Por primera vez desde 1945 los tres candidatos a la Presidencia de la República son militares. Uno de ellos, el General Laugerud, representa la continuidad de la alianza sin fisuras de la burguesía, a la cual se añade esta vez el nuevo grupo económico surgido alrededor de los intereses Aranistas y Somocistas (para señalar sólo los socios principales del grupo). El segundo, el General Ríos Mont, levanta la bandera de la pequeña burguesía, una pequeña burguesía populista, radical en sus pronunciamientos hasta un cierto punto, y en la que se agrupan demócratas cristianos, socialdemócratas y una fracción del Partido Revolucionario, tendiente asimismo a una cierta social-democracia tal vez más a la izquierda de la de Manuel Colom Argueta, y expelida del PR, el cual ha iniciado ya su proceso de asimilación a los partidos burgueses, aunque en esta ocasión lo vaya a hacer por el procedimiento poco elegante, si bien no menos práctico del soborno. El tercer candidato, por lo tanto —su condición de militar en retiro lo simboliza bien por contraste con los otros dos candidatos, recientemente aún altos jefes de las Fuerzas Armadas—, no es más que un candidato de paja, lanzado por un partido que no luchará en el proceso electoral para vencer, sino únicamente para llenar el expediente, haciendo más verosímil el triunfo del candidato de la burguesía, decretado por anticipado ya.

símil el triunfo del candidato de la burguesía, decretado por anticipado ya.

El hecho de que todo el mundo señale —en el proceso electoral de 1974— un fraude monumental, apunta hacia un desarrollo paradójico: en el momento de su encumbramiento al poder absoluto, la coalición política de la burguesía y del Ejército ha perdido ya sobre el pueblo —al menos sobre el pueblo que va a las umas, que en Guatemala es una minoría siempre desde 1966— el control político-ideológico. El plan económico de modernización del capitalismo dependiente guatemalteco ha aparecido ante los votantes sin su máscara; hambre y terror han sido la traducción de la “pacificación con justicia” que el Presidente Arana había ofrecido en su discurso de inauguración. Por mucho que se atribuya el alza del costo de la vida a la inflación importada a partir de la crisis energética de diciembre de 1973, existe una conciencia clara de que la rapacidad del capitalismo está también en la base de este proceso que aprieta los cinturones de los guatemaltecos del campo y de la ciudad. La violencia, por otro lado, de parte del gobierno y de los grupos paramilitares clandestinos de ciertos sectores de la burguesía antigua y nueva, nunca fueron tan indiscriminadas en sus golpes como en la presidencia de Arana. Sólo por la imposición de la fuerza bruta se podrá mantener la continuidad del régimen.

Por otro lado, dentro de la coalición de la burguesía, aparecen durante esta campaña electoral de 1974 los primeros signos de un enfrentamiento entre fracciones al interior de la clase dominante. Una jugada política, pensada para obtener márgenes de negociación política dentro de la candidatura oficialista para el MLN, le sale mal al director nacional de este partido. Se trata del ofrecimiento de la candidatura presidencial del MLN hecho a Clemente Marroquín Rojas, ex-vicepresidente de la República y periodista imprevisible. Los términos del arreglo se expresan en un famoso *memorándum* sobre las fuerzas políticas enviado por el mencionado director nacional del MLN a don Clemente. Cuando todo el manejo se muestra engañoso y cuando tampoco se cumple la presunta promesa de inscribir como partido político a un comité cívico encabezado por una hija del Lic. Marroquín, éste publica en su diario de la tarde, *La Hora*, el citado *memorándum*. En él salta a la vista la pobre impresión que de su socio partidista en la coalición burguesa, el PID, tiene el director del MLN; pobre impresión respecto de la capacidad política de sus dirigentes y respecto de su coherencia ideológica. Las semillas del desacuerdo intraburgués están ya sembradas.

La presidencia del General Laugerud presenta desde su comienzo un claro proyecto económico. No se harán reformas sociales profundas. El desarrollo económico de Guatemala se sustentará sobre los siguientes pilares: una inversión siempre en aumento

del Estado en proyectos de infraestructura, posibilitante de un crecimiento industrial y agroindustrial, y financiado por un endeudamiento externo cada vez mayor proporcionado por los Bancos internacionales del sistema; esta inversión se dirigirá sobre todo a proyectos hidroeléctricos. Un pacto con la inversión extranjera privada para desarrollar los recursos petroleros de Guatemala, largo tiempo mantenidos en reserva, y en cuyo desarrollo el Estado será socio importante. Continuación de un pacto semejante, iniciado en la Presidencia de Arana y en condiciones mejores para la inversión privada extranjera, que atañe a la extracción del níquel. Facilidades continuadas para la inversión privada extranjera en la agroindustria y en la industria. Finalmente, un proyecto de desarrollo del turismo, en el que de nuevo los inversores extranjeros y los nacionales serán socios. Un proyecto, en suma, en el que para nada se toca a fondo la posible expansión de un mercado interno, sino que se atiende a las necesidades de consumo y de producción para la exportación (que a su vez revertirá en el consumo) de la misma minoría dominante. El proyecto se hará aún más grandioso con la apertura de las tierras cercanas —relativamente— a los núcleos petroleros y mineros por medio del planeamiento y comienzo de construcción de la carretera transversal norte. Esta carretera unirá los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, y entrará por el Petén hasta el mero borde del territorio beliceño en disputa. Tierras de gran fertilidad, antes incomunicadas, quedarán disponibles para extraer de ellas una renta capitalista racional; el Petén quedará además multiplicado en sus posibilidades de comunicación. Sobre estas tierras, principalmente en el Departamento de Alta Verapaz, se iniciará una intensificación del proceso de despojo (por el procedimiento de "titulación supletoria") que ya llevaba funcionando años y que había arrastrado a miles de indígenas campesinos kekch'és a la emigración hacia Belice.



El primer ímpetu de todo este proceso de modernización capitalista había inducido en el campo guatemalteco, sobre todo en el altiplano indígena, un cierto aumento del nivel de vida, a través sobre todo de la mayor facilidad de comercio por medio de las nuevas vías de comunicación y del abaratamiento del transporte, y a través del respiro dado a la escasez de tierra por la multiplicación de cosechas proveniente de la introducción del fertilizante químico. Sin embargo, un aumento desmedido de los precios del fertilizante (a raíz del aumento de los precios del petróleo), para subsidiar el cual no hizo nada el Estado, hizo de nuevo aparecer el espectro del hambre en las tierras minifundistas. La tensión entre la ciudad y el campo se manifiesta también en la resistencia a pagar precios decentes por los productos agrícolas no tradicionales que en el minifundio se empezaron a cultivar en la década de los 60 (papas, verduras, etc.), resistencia explicable, por otro lado, por el aumento del costo de la vida también en la ciudad. Por otro lado, las expectativas campesinas son frustradas, en primer lugar, a través de la larga cadena de intermediarios entre productores y mercado y, en segundo lugar, a través del ahogo —más bien que alivio— producido por los organismos autónomos del Estado (de crédito —BANDESA—, de comercialización de granos básicos —INDECA—, de reforestación —INAFOR—, etc.). Todo esto hace que despierten fuertes semillas de rebeldía en el agro guatemalteco.

El gobierno Laugerud intentó salir al paso de este peligroso descontento con un programa de fomento del cooperativismo, que trató fundamentalmente de conceder —por otros medios— un respiro económico a una parte del campesinado, mientras —como efecto secundario pero plenamente coherente con una política inteligente de contrainsurgencia— se montaba una red de control de la inmensa proliferación de organizaciones, ligas, comités, asociaciones y ramas partidistas de las que estaba erizado el altiplano indígena. La frase programática del Presidente Laugerud: "dar a los pobres sin quitar a los ricos", expresaba a la perfección el callejón sin salida de este estado del crecimiento económico y modernizante del capitalismo, reacio a hacer las reformas que pudieran consolidarlo socialmente.

En julio de 1975, la guerrilla revolucionaria resurge en Guatemala con un nuevo estilo, representado por el Ejército Guerrillero de los Pobres. Ya no se trata de un foco; por el contrario, las operaciones serán llevadas a cabo con movilidad notable en casi todo el territorio nacional. Tampoco se trata ya de una punta de lanza, separada de los intereses diarios del pueblo; por el contrario, la guerrilla golpea allá donde surge una lucha popular que se trata de reprimir. Por añadidura, la guerrilla emite boletines que explican al país lo que pretende con sus actos, y estos boletines alcanzan las páginas de la prensa na-

cional y llegan a los radioperiódicos y a la televisión, bien por simple interés periodístico bien por presión en el contexto de un golpe guerrillero. La guerrilla, finalmente, proclama una ideología de unión de las izquierdas, dejando en un segundo plano la competencia destructiva por el liderazgo vanguardista que caracterizó a los diferentes grupos guerrilleros de la década de los 60. Este tipo de guerrilla obliga al Estado a desarrollar una acción represiva abierta (por mucho que se pretenda ocultar), de la cual creía haberse podido eximir desde 1972 más o menos. Esta acción represiva, de nuevo caracterizada por la indiscriminación en su dureza, la ve el Ejército como necesaria para privar de su base de alimentación al movimiento subversivo armado. El país adquiere más que nunca el carácter de un territorio en guerra larvada, pero no menos real. En este contexto naufraga toda la imagen providente de la Acción Cívica Militar, elemento importante del programa global de contrainsurgencia.

En estas circunstancias, sobreviene el cataclismo del 4 de febrero de 1976. El terremoto, elemento concientizador por excelencia para mucha parte del pueblo empobrecido del país, ya que no sólo por fuerzas de la naturaleza, sino también por las condiciones sociales del país lo que se destruye es la vivienda de los pobres urbanos y rurales y lo que queda amenazado es su proceso productivo y su empleo, ofrece al Estado una oportunidad crucial para demostrar su preocupación por las mayorías. La presencia del Ejército en el proceso de reconstrucción y la presencia de los organismos autónomos del Estado, aparece ante el pueblo, sin embargo, más como una presencia controladora que benefactora. No se logra ocultar que son las instituciones privadas, nacionales y extranjeras y las ayudas de los Bancos del sistema y de algunos Estados extranjeros, las que realizan la mayoría de los proyectos de reconstrucción, mientras el Estado guatemalteco se los apropia al inaugurarlos. Incluso la imagen innegable de un Presidente que se hizo presente en las horas de emergencia a lo largo y lo ancho del territorio golpeado por la catástrofe, queda obnubilada por los aparatos burocrático y militar de un Estado que extrema el control y aun la represión de la ciudadanía tanto en el campo como en la ciudad, y —en ocasiones— no impide sino que más bien ayuda la represión que por su cuenta ejerce la clase dominante, sobre todo en la industria capitalina.

En todo este proceso, la pequeña burguesía muestra cada vez más su ambivalencia política. Incapaz ya previamente de haber defendido su triunfo de 1974 en las urnas, oscila ahora en alianzas políticas que la presentan como oportunista, electorera y buscadora únicamente de su continuismo en la profesión de hacer política. El centro de poder de la social-democracia capitalina —la municipalidad de Guatemala— ofrece el espectáculo de la mayor inep-

titud y de una creciente corrupción, rara vez observadas antes en el Ayuntamiento de la Capital. Y la causa en gran parte es el personalismo de un líder que, al dejar la alcaldía, fuerza como sucesor suyo —para evitar que se le haga sombra en su movimiento político— a un correligionario incapaz. La expresión política pequeña burguesa concretada en el PR pasa por oscilaciones y cambios de dirección política que la conducen al borde del aniquilamiento como fuerza política, hasta que se enrumba de nuevo en una dirección decididamente burguesa.

Sin embargo, el capitalismo dependiente de Guatemala experimenta un boom económico sin precedentes, como consecuencia, en primer lugar de la inyección de dinero internacional provocada por el proceso de reconstrucción, y, en segundo lugar, como consecuencia del alza coyuntural —tendiente hasta un cierto punto a convertirse en estructural— de los precios del café en el mercado internacional. Por la estructura impositiva de la producción del café, el Estado percibe ingresos que nunca habría soñado, ya que las escalas progresivas habían sido diseñadas en una perspectiva en la que nunca se esperó que los precios ascendieran hasta las alturas de 1975-76-77.

Dentro de esta expansión económica, se va a poner en marcha un proceso de exclusión política de la derecha más ideológica y más atrasada. Ya en 1975, un año después del comienzo de la Presidencia de Laugerud, el MLN, refractario incluso al pseudo-reformismo cooperativista, expresa una postura política de oposición y declina responsabilidades en la conducción de las políticas estatales. Desde ese momento, la brecha al interior de la burguesía se irá abriendo cada vez más. Esta escisión intraburguesa determinará un período de debilidad del gobierno que acaba de terminar, mientras —por el contrario— el Estado en su conjunto se consolida cada vez más en su relativa autonomía respecto de la clase dominante.

En parte por las condiciones objetivas ya antes señaladas —alza del costo de la vida y consiguiente empobrecimiento urbano y rural respecto de los años inmediatamente anteriores; recrudescimiento del reto político-militar al Estado y a la clase capitalista dependiente; fracaso de los programas pseudo-reformistas; desvelamiento de la verdadera cara explotadora y represiva del sistema—, y en parte también por una labor creciente de concientización y organización popular, ya desde 1975 se observa un auge en las luchas populares, una multiplicación de conflictos laborales sobre todo en la ciudad pero también en la agricultura de exportación, y una tendencia a la constitución de organizaciones obreras y campesinas de alcance nacional. La que mayor importancia asume desde 1976 es el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), embrión frágil aún de una central unitaria sindical obrera. La reacción de

la burguesía más recalcitrante no se hace esperar mucho. La violencia contrarrevolucionaria de los grupos paramilitares descargan golpes tanto sobre personalidades importantes (la más famosa de ellas, el abogado laboral, ex-decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Mario López Larrave) como sobre líderes obreros y campesinos menos conocidos a nivel nacional. Después de años de anonimato de organizaciones como la MANO, surge en mayo de 1977 el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), con un contenido clasista en su proclama fundacional desconocido antes en grupos de esta clase. Las amenazas de contestar a la violencia con la violencia (?) expresadas por el máximo dirigente del MLN provocan incluso una contestación del Presidente de la República. Como lo atestigua la prensa nacional, más libre ahora, probablemente por la debilidad antes mencionada del Gobierno (a la que se añade el factor de que el Presidente de la República no parece haber podido conservar el mismo control omnipotente sobre el Ejército que ejerció su predecesor), desde junio de 1977 la violencia contrarrevolucionaria se intensifica en Guatemala de manera extermosa. Todos estos rasgos presagian ya la coyuntura política en que nos encontramos.

Pasaremos ahora a enunciar lo que nos parecen ser los rasgos predominantes de la actual coyuntura política que vive Guatemala. Lo haremos en dos tesis y una conclusión.



Quinta Tesis. La marginación de la extrema derecha del poder para posibilitar la continuación y profundización del proceso capitalista dependiente modernizante.

En marzo de 1977, al iniciarse las primeras conversaciones alrededor de posibles alianzas electorales, se comienza a entrever un plan grandioso económico y político. Económicamente se pretende seguir consolidando el proceso antes descrito en un esfuerzo de continuidad de un crecimiento económico sostenido. No hay duda sobre el hecho de que, a nivel de candidaturas presidenciales, se repetirá el esquema de 1974: los candidatos serán miembros del Ejército, cada vez más consolidado en su arbitraje del poder de clase, del cual es ya socio. Se pretende, sin embargo, políticamente lograr una gran unidad nacional, que posibilite un proceso democrático puro, legítimamente capaz de borrar los efectos negativos —a nivel de justificación político-ideológica— del fraude de 1974. De esa gran coalición de unidad nacional sólo quedaría expulsada la fracción de clase más ideologizada, más fanáticamente anticomunista y tecnológicamente más atrasada, aquella que está representada en el MLN políticamente. Se trata, en cambio, de aglutinar en un Frente Amplio a dos partidos burgueses de avanzada capitalista, el PID y el PR (en el cual dominan ya, tras de los cambios políticos antes mencionados, los intereses algodonereros), a un grupo político importante por su potencia financiera y por sus influjos en parte de la oficialidad de alta graduación —el Aranismo—, a la Democracia Cristiana y a la social-democracia (a esta última, ofreciéndole la promesa de su elevación a partido político durante el próximo período presidencial). El plan responde, por lo tanto, a un intento de legitimación democrática —típico ejemplo de la democracia restringida, puesta de moda para América Latina por los intereses transnacionales de la Comisión Trilateral representados en la política del Presidente Carter .

Ya para junio de 1977 queda, sin embargo, suficientemente claro que la presencia del aranismo en la nueva coalición política es un obstáculo demasiado grande para que —oficialmente— la social-democracia del ex-alcalde Manuel Colom Argueta se alinee en el pacto. La falta de visión política de la Democracia Cristiana, su sensación de que la cuota de poder que se le ofrece dentro de esta unidad nacional es demasiado exigua, el rechazo, de parte de hábitos inveterados de la burguesía de aceptar a la DC en sus filas, o el personalismo político de contendientes presidenciales —permitido por la menor unidad monolítica al interior del Ejército—, todos estos factores reunidos o algunos de ellos impiden también el alineamiento en este Frente Amplio de la DC. Esta última intenta incluso una alianza de última hora con el MLN para conseguir un papel crucial

en la Directiva del último período del Congreso en orden a asegurar la posibilidad de respeto al triunfo posible de candidatura en caso de mayoría plural y no absoluta. La alianza se rompe a última hora y la DC sólo consigue aumentar su desprestigio, al haber negociado incluso lo que parecía en ella menos negociable: su ideología totalmente opuesta a la del MLN, al menos según sus proclamas políticas. Este desprestigio acabará de consumarse cuando la selección de su candidato vicepresidencial se prolongue por meses, sacrificando al final una posibilidad —por lejana que hubiera sido— de arrastre a nivel de cooperativistas y de pobladores de barrios marginados en aras de una candidatura sectaria, la de su presidente honorario.

Dentro del Frente Amplio, constituido ya más modestamente por el PID, el PR, los aranistas y un comité cívico (Acción Democrática Guatemalteca) desgajado ad hoc del núcleo político que lidera Colom Argueta para permitir una alianza subterránea con el ganador, que mantenga las posibilidades de que tal núcleo sea elevado a partido, surgen también tensiones internas respecto de la candidatura vicepresidencial. El General Lucas, ex-ministro de la Defensa, ex-Presidente del Comité de Emergencia Nacional, ex-Ejecutivo de la Faja Transversal Norte, quien se autodenomina “el soldado de izquierda” o “el Indio Lucas” (aludiendo con este último apelativo a su origen altaverapacense y a su dominio de la lengua kekchí), mantiene firmemente la propuesta de la burguesía: la candidatura del Doctor Francisco Villagrán Kramer, de nuevo militante del PR remozado, y cuyo revolucionarismo de otros tiempos ha quedado probablemente suficientemente aplacado con su actual posición como abogado asesor del CACIF, la organización que reúne a todas las suborganizaciones de la empresa privada. Para el aranismo, la imagen izquierdista de Villagrán es —con todo— un hueso demasiado duro de roer. Sin embargo, para la consolidación del proyecto económico modernizante, Villagrán, precisamente por su imagen, por su inteligencia privilegiada y sus capacidades de internacionista, además de su actual apiguamiento ideológico, es la figura ideal para dar a la política internacional de Guatemala una nueva oportunidad. El idealismo casi místico del Presidente Laugerud respecto de la recuperación de Belice —aunque en ocasiones sirvió para desviar, en momentos de crisis del gobierno, la atención pública hacia una causa nacionalista de la que no estaba permitido disentir, a riesgo de adjudicarse el calificativo de traidor a la Patria— representó objetivamente, sin embargo, un factor de irracionalidad en las posibilidades de negociación económica pacífica de una parte del territorio beliceño (¿tal vez aquella en que se prevé existe petróleo?) y un elemento de continuas derrotas guatemaltecas en foros internacionales, como la ONU, e incluso de reticencia en foros

latinoamericanos, como la OEA. Para el tratamiento de un problema tan espinoso se necesitaba una personalidad del tipo de la de Villagrán Kramer. Su inteligencia, por otro lado, y sus múltiples conexiones políticas lo hacían envidiable como intermediario político de conflictos intraburgueses e incluso como futuro interlocutor de movimientos populares. El aranismo tuvo que tragarse esta píldora amarga como precio de su permanencia en el poder. La derecha aranista, con todo, ha demostrado ampliamente que puede unir un celo notable anticomunista con un pragmatismo económico-político no menos notable.

La campaña electoral, iniciada a fines de octubre, en un tono menor inusitado, presentó, pues, tres contendientes: la alianza de la burguesía modernizante (liderada probablemente por fracciones de agroexportadores algodoneros, por industriales y por cafetaleros-azucareros-banqueros) presentó al General Lucas y al Doctor Villagrán Kramer. La Democracia Cristiana y un frustrado Frente de Participación Popular (cooperativistas y pobladores supuestamente) presentaron al General Peralta Méndez, militar de cierta fama progresista e ilustrada, ex-Director y Fundador del Centro de Estudios Militares (CEM), ex-Ejecutivo de la reconstrucción nacional, y al Lic. René de León Schlotter, presidente honorario de la DC. Finalmente, el MLN resucitó la decrepita figura del ex-Jefe de Estado, domiciliado en Miami, Coronel Peralta Azurdía, llevando como Vicepresidente al Doctor Aragón Quiñónez, Presidente del Comité Político del MLN.

Las condiciones objetivas antes mencionadas, unidas a la creciente conciencia política de obreros y campesinos y ligadas a la condición favorable de encontrarse en plena campaña política (lo cual dificultaba a un Gobierno —débil además— acciones de represión contra el movimiento popular), culminaron en una serie de acciones que hicieron de ésta la gama de las masas organizadas más que de los partidos políticos. Los acontecimientos más importantes fueron la marcha de más de trescientos kilómetros de los mineros de San Ildefonso Ixtahuacán (Huehuetenango), a través de todo el altiplano occidental hacia la Capital, a la cual se unieron más tarde, también en marcha pacífica, los trabajadores agrícolas de la finca y del Ingenio Pantaleón, y que reunió entre participantes y observadores cerca de cien mil personas, y la huelga general de empleados del Estado, que mantuvo en vilo a éste en la segunda quincena de febrero y estuvo a punto de forzar un proceso electoral administrado por el Ejército; si esto último no sucedió fue porque el Gobierno se vio obligado a ceder a los planteamientos de los empleados públicos.

También en medio de la campaña electoral, el Ejército Guerrillero de los Pobres realizó dos acciones de “castigo” sobre prominentes miembros de la

burguesía: en una de ellas, fallida en cuanto a sus últimos objetivos políticos, murió el industrial y comerciante Luis Canella, uno de los apoyos más firmes del aranismo. En otra, con la que se terminó el año 77 y comenzó el 78, el EGP secuestró al agroexportador, agroindustrial y banquero, Roberto Herrera Ibarquén, uno de los pocos exponentes de la más rancia y más poderosa burguesía que ha aceptado responsabilidades políticas directas, en concreto las de Ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores —representando al MLN— en el Gobierno del General Arana. La importancia de estos hechos, según reconoció la prensa guatemalteca, estuvo en airear públicamente los presuntos crímenes de la burguesía y del Gobierno y en plantear una convocatoria popular totalmente contradictoria con el planteamiento de la democracia formal electoral.

Hasta el último momento de la campaña electoral nadie esperó que las fuerzas políticas contendientes fueran a llegar como se ha descrito a la hora de las urnas. Más bien, la opinión unánime estaba centrada en la probabilidad de un manejo político de última hora, que realineara al MLN con sus viejos compañeros de coalición política, el PID y el aranismo. Sin embargo, al menos, por el momento, el proyecto de marginación política de la extrema derecha resultó un hecho consumado.

Sexta Tesis. Los costos políticos de la marginación política del MLN en aras de la modernización profundizada del proceso capitalista dependiente guatemalteco.

Con el día de las elecciones termina una coyuntura política y comienza otra. El 5 de marzo, la burguesía modernizante y el Ejército de Guatemala se jugaron un riesgo importante y ganaron la apuesta. Los costos políticos, con todo, fueron enormes.

A consecuencia de la inserción en puestos de poder importantes, como el Consejo Nacional Electoral, de representantes del MLN, a consecuencia del poder político conseguido en las elecciones municipales para alcaldes por el MLN en 1976, esta fuerza política estuvo en capacidad de estropear el plan de pureza electoral democrática diseñado por las expresiones políticas de la burguesía modernizante y de sus socios militares. Las primeras cifras del conteo electoral, las únicas que fueron televisadas a la nación y las únicas que mostraban votos nulos y en blanco, fueron interrumpidas en su publicidad en la madrugada del lunes, 6 de marzo. Desde entonces, los fraudes y contrafraudes se sucedieron en una tragedia alucinante, que constituyó un largo proceso de deslegitimación de la constitucionalidad burguesa. El proceso electoral, por lo que se refiere al nivel más alto presidencial y vicepresidencial, quedó resuelto en una semana, cuando el Congreso de la República, dominado por representantes del Frente

Amplio, decretó el triunfo del General Lucas y del Doctor Villagrán Kramer, sin tan siquiera dejar pasar el tiempo de ley para dar lugar a recursos de amparo o de inconstitucionalidad, y a continuación incineró el cuerpo del delito: las papeletas electorales. Por el contrario, el proceso de adjudicación de curules para el Congreso y de Alcaldías (allá donde tocaba elección) se prolongó por dos meses, angustiosos para el poder constituido. Nadie en definitiva podrá saber el resultado verdadero de estas elecciones. Lo que es innegable es que el triunfador del proceso fue el abstencionismo y el voto nulo. En el abstencionismo hay que disociar al tradicional, representado, por ejemplo, por la mayor parte de la mujer guatemalteca indígena y por la población muy alejada de los centros de votación o simplemente de los centros nerviosos de la actividad del país, de un abstencionismo consciente, aumentado por el porcentaje de población con derecho a voto, que sí acudió a las urnas, pero votó en blanco o nulificando su voto. El 22 o/o más o menos de la población con derecho a voto que se repartieron los tres candidatos presidenciales, es un signo de qué clase de mandato popular acompaña al "triunfador" de estas elecciones. Finalmente, la adjudicación de curules al Congreso no es evidentemente fruto de una elección, sino de una negociación entre las partes interesadas.

La pequeña burguesía, al menos la representada por la DC, ha asistido a una derrota de su opción —su candidato ocupó un distante tercer lugar en la contienda— que supone un enorme retroceso con respecto a 1974. Con ello, se ha pagado el precio que cuesta el oportunismo, el sectarismo personalista y la voluntad de permanecer jugando el jugoso juego de la participación democrática. Precio, probablemente, pagado conscientemente para conservar el medio de vida que es la profesión de político. Pero precio tal vez no calculado en las consecuencias de frustración y de enojo producidas en las ya exiguas bases del partido.

Por primera vez en muchos años (desde 1966), la subida al poder del "Presidente electo" no ha estado segura hasta el primero de julio. La derecha política, representante de un capitalismo atrasado y sin vigor, pero coherente en sus posiciones y fanática en sus opciones, optó sucesivamente por la movilización callejera, los recursos legales, la convocatoria (clandestina) a un golpe de Estado y la creación de situaciones penosas para el Gobierno saliente y tal vez para el entrante, situaciones que la voz del pueblo (*vox populi*) —precisamente por sus rasgos violentos— le atribuye en virtud de su imagen.

No terminó esta coyuntura post-electoral sin que la burguesía y el Ejército de Guatemala tuvieran que pagar costos aún mayores. La matanza de bastante más de cien campesinos indígenas kekchies, hombres, mujeres y niños, en la población de Panzós, equidistante de los pozos petroleros de Rubel-

santo y de la mina de níquel de El Estor y cercana a la faja transversal norte, es símbolo de las contradicciones de un crecimiento económico capitalista dependiente que, dentro de la formación social guatemalteca, aún reúne rasgos de notable modernidad con formas de acumulación primitiva por el despojo violento, liso y llano, de tierras revalorizadas, las tierras del Valle del Río Polochic. La imagen de la Presidencia de Laugerud, ya destrozada por la trágica media electoral —probablemente no pretendida por él—, la imagen del Ejército guatemalteco, la imagen de la burguesía modernizante, han quedado reveladas en su capacidad, al menos, de tolerar el crimen y la represión más cruel e indiscriminada en aras de sus intereses económicos. A raíz de la matanza, una nueva fuerza popular ha demostrado que, hoy en Guatemala, al menos por el momento, no parece probable que las organizaciones populares sean paralizadas por el terror. Incluso una Iglesia, hasta ahora ausente de tales luchas populares, marchó junto con tales organizaciones en protesta por la represión al pueblo; hecho importante, dadas las amenazas previas del Ministro de la Defensa y del de la Gobernación; hecho importante, aunque salte a la vista que se trate aún de minorías. Con todo, la voz de jerarcas y del clero en su conjunto en varias diócesis se dejó oír en los medios de comunicación masiva con unos tonos denunciadores inauditos hasta hoy y con unos contenidos que no se limitaban al acontecimiento trágico de Panzós, sino aprovechaban el nuevo impulso para revelar la represión, larga ya de tres años, de la Zona Ixil del Quiché, o la del Oriente guatemalteco, aún más afieja. Por importante que sea este comienzo de reversión del proceso religioso que justificó en el 54 la contrarrevolución, más importante aún son los gestos de protesta organizada de 80.000 obreros, campesinos, estudiantes y pobladores de barriadas y asentamientos urbanos marginados, que el 8 de junio desfilaron por las calles de la capital sin permiso de Gobernación. No hace esto sino ratificar el proceso de conciencia política que ha visto manifestar por las calles —en justa protesta— a las masas explotadas de Guatemala desde el primero de mayo de 1976 incontables veces. Y sin embargo, nadie se engaña sobre los conflictos internos en el seno del CNUS ni sobre la visión estrecha del obrerismo que ve con malos ojos aún la creciente conciencia de un campesinado y de unos obreros agrícolas, que sólo a partir del reconocimiento de sus intereses peculiares pueden dar algún contenido que no sea demagógico a la tan traída y llevada alianza obrero-campesino. Un pacto sólo se da entre grupos que se respetan. Nadie se engaña tampoco sobre la capacidad represiva de un sistema, cuya estrategia fundamental de contrainsurgencia, aunque gustaría de evitar excesos como los de Panzós, está dispuesto a cometerlos o, al menos, a encubrirlos.

CONCLUSION: BALANCE DE PODER.

Hoy es ya una seguridad el ascenso al poder del Frente Amplio. Se trata, resumiendo, del ascenso al poder de una coalición burguesa modernizante, con un proyecto económico de crecimiento sin reformas, con un proyecto político de control estricto de toda disidencia, con una aceptación gustosa de subalternidad respecto del capitalismo central, con un Ejército asociado a su condición de clase dominante en su alta oficialidad y —probablemente— con un sector de la pequeña burguesía —una de las ramas de la social-democracia— en espera de la recompensa que le permita entrar más plenamente en el juego político y asegurar mejor sus intereses. Existen en esta coalición tensiones internas; no es la menor de ellas la que representa la condición de aliado menor (únicamente tres curules en la mayoría parlamentaria) asignada al aranismo, a quien además —como evidentemente lo mostraron las preguntas intencionadas a los tres candidatos durante la campaña, preguntas hechas en sus reuniones con la Cámara de Comercio guatemalteca— se ha exigido desprenderse de sus vínculos con la estrella declinante del Grupo Somoza. En el nuevo empujón hacia la modernización capitalista de Guatemala no se permiten capitales mafiosos ni modos de acumulación capitalista extra-económicos (por extorsión, competencia desleal, etc.).

Agazapados, sin embargo, en el Congreso y en multitud de Alcaldías de los Departamentos, los representantes del MLN esperan la mínima oportunidad para recobrar su parte en el centro del poder político. Su marginación efectiva no resultará ningún juego de niños. Los veinte diputados emelenistas, la bancada más numerosa unitariamente, representan un latente poder de negociación, que será puesto en acto en cuanto aparezca la menor fisura en el Frente Amplio. Por el momento, no parece probable tal fisura, dado el número y la importancia de puestos ministeriales encomendados a militares (Educación y Finanzas, además de Defensa, por supuesto). Una prueba de fuego puede venir en el proceso de selección del nuevo Presidente del Organismo Judicial, proceso cuya fecha tope de resolución es el primero de agosto.

Finalmente, la cuota de poder del pueblo organizado, es hoy mayor que en ningún otro momento desde 1954. Y la deslegitimación del statu quo no se queda rezagada. Este es el balance de la actual coyuntura guatemalteca.

Guatemala, primero de Julio de 1978.